



Consejo de Seguridad

Distr.
GENERAL

S/17426
29 agosto 1985
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

**CARTA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 1985 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL POR
EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE SUDAFRICA ANTE LAS NACIONES UNIDAS**

En atención a una solicitud del Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Honorable R.F. Botha, adjunto a la presente el texto de una carta que dirigió a usted el 28 de agosto de 1985.

Le agradecería que la presente carta y su anexo fuesen distribuidos como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Kurt Von SCHIRNDING
Representante Permanente

Anexo

Carta de fecha 28 de agosto de 1985 dirigida al Secretario General
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica

Tengo el honor de referirme a la resolución 569 (1985), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 26 de julio de 1985, así como a la declaración leída por el Presidente del Consejo el 21 de agosto de 1985 en la 2603a. sesión del Consejo y de formular las siguientes observaciones:

Dado que la resolución y la declaración violan el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado Miembro, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, el Gobierno de Sudáfrica rechaza ambas y las considera ilegítimas e inaceptables. Además, sientan un peligroso precedente pues el Consejo de Seguridad intenta ordenar a un Estado soberano, bajo amenaza de sanciones, que tome determinadas medidas en el plano interno.

Los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad en la resolución son también sospechosos porque uno de los requisitos exigidos a Sudáfrica, una "sociedad libre, unida y democrática sobre la base del sufragio universal" no es cumplido por un gran número de Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Además, la resolución es sumamente irresponsable y peligrosa al instar a que se tomen medidas punitivas que, de aplicarse, podrían tener efectos perjudiciales sobre la economía y la estabilidad de Estados vecinos de Sudáfrica.

Aunque no le guste al Consejo de Seguridad, es un hecho que la República de Sudáfrica, en razón, entre otras cosas, de su situación geográfica, su relativo poderío económico, su avance tecnológico en todas las esferas importantes de la vida y su amplia red de transportes, desempeña un papel importante, si no indispensable, en la vida económica de muchos Estados de la región del África meridional.

Si se impusieran en su contra las sanciones a que ha instado el Consejo de Seguridad, como la suspensión de toda nueva inversión en la República de Sudáfrica, obviamente la República de Sudáfrica necesitaría reservar todos los fondos de que dispone para atender las necesidades de su propia población, que aumenta rápidamente. En ese caso, no podría seguir otorgando préstamos y ayuda financiera a Estados vecinos ni a otros Estados de África. Asimismo, en ese caso, debería dar preferencia a su propia fuerza de trabajo, lo que pondría en peligro las oportunidades de empleo que tienen actualmente cientos de miles de trabajadores expatriados de Estados africanos vecinos que, como es sabido, dan sustento con sus remesas periódicas a muchos millones de personas que dependen de ellos en países vecinos. Se calcula que 10 millones de africanos subsisten así gracias al millón y medio de trabajadores expatriados que tienen empleo en la República de Sudáfrica.

Es importante que deje constancia escrita de que el Gobierno de Sudáfrica mantiene como política inquebrantable ayudar y apoyar en lo posible a los países vecinos del África meridional en las esferas de las finanzas, el comercio, el desarrollo económico, las oportunidades de trabajo, los transportes, las comunicaciones, el suministro de electricidad, la medicina, la agricultura, etc.

El Gobierno de Sudáfrica está dispuesto a ampliar en lo posible esa cooperación. Sigue siendo también política del Gobierno que los países del Africa meridional resuelvan por sí mismos, sin injerencia externa, los problemas de la región.

Sin embargo, si la economía de Sudáfrica se viera afectada negativamente por las medidas desafortunadas a que insta el Consejo de Seguridad en su resolución 569 (1985), en toda la región del Africa meridional habría estancamiento, regresión y una mayor pobreza. La responsabilidad de ello recaerá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por último, el Gobierno de Sudáfrica rechaza la acusación que se hace en el preámbulo de la resolución de que la imposición del estado de emergencia en ciertas zonas de la República "constituye un grave deterioro de la situación" en el país. Por el contrario, el estado de emergencia fue impuesto para hacer frente a una situación de anarquía en las poblaciones negras que incluía asesinatos brutales, homicidios e incendios intencionales, la destrucción de bienes públicos y privados y la intimidación a gran escala de negros por parte de otros negros. El estado de emergencia será levantado tan pronto como desaparezca esa situación de anarquía.

En el ínterin, el Gobierno seguirá buscando la forma de celebrar consultas con los representantes de la opinión pública negra con miras a hallar una solución al problema de asegurar plenos derechos económicos, civiles y políticos a todos los grupos demográficos del país, sin que ningún grupo domine a otro y sin poner en peligro el poderío de la economía sudafricana. Se trata de por sí de un problema que habrá de resolver la propia población de Sudáfrica, sin injerencia externa.

Agradecería que hiciera distribuir la presente como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) R.F. BOTHA

[Firma manuscrita]